

¿Por qué el Ecuador no supo aprovechar los acuerdos de paz en Colombia?

Why Ecuador Failed to Capitalize on the Colombian Peace Agreements?

Nicolás Buckley 

Universidad Europea de Madrid

nicolas.buckley@universidadeuropea.es

Artículo: recibido el 08 de abril de 2026 y aceptado el 05 de junio de 2026

Cómo citar este artículo:

Buckley, N. (2026). A 10 años de la Firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP ¿Por qué el Ecuador no supo aprovechar los acuerdos de paz en Colombia?. *Revista Reflexión Política*, 28(57), pp.xx-xx,doi: <https://doi.org/10.29375/01240781.5632>

Resumen

El Estado ecuatoriano, con el gobierno progresista de Rafael Correa en el poder, vivió con esperanza la llegada de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el Estado Colombiano en 2016. Este artículo tiene como objetivo tratar de explicar cómo, desde entonces, ambos países han transitado por escenarios diametralmente opuestos. Por un lado, el gobierno de Gustavo Petro, con su programa de “Paz Total”, ha querido continuar con el legado histórico de los acuerdos. Por el otro, el gobierno de Daniel Noboa ha focalizado la estrategia de seguridad en la represión interna del enemigo. Como resultado final el artículo abordará el concepto de “laboratorio ecuatoriano” precisamente para tratar de entender la puesta en práctica de una serie de medidas coercitivas por parte del gobierno de Noboa nunca vistas anteriormente en la región.

Keywords: acuerdos de paz, laboratorio ecuatoriano, narcotráfico, terrorismo, conflicto armado.

Abstract

The Ecuadorian state, under the progressive government of Rafael Correa, welcomed with optimism the signing of the peace agreements between the FARC-EP and the Colombian state in 2016. This article aims to explain how successive changes in government in both countries have led them along diametrically opposed trajectories. On the one hand, the administration of Gustavo Petro, through its concept of “total peace,” has sought to continue the historical legacy of the agreements. On the other hand, the government of Daniel Noboa has focused its security strategy on the internal repression of the enemy. As a result, the article develops the concept of the “Ecuadorian laboratory” in order to analyze the implementation of a series of coercive measures by the Noboa administration that are unprecedented in the region.

Keywords: peace agreements, Ecuadorian laboratory, drug trafficking, terrorism, armed conflict.

1. Introducción

¿Qué relevancia tiene analizar cómo los acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP en 2016 han condicionado al Ecuador en este décimo aniversario? Ecuador, a diferencia de sus vecinos Colombia o Perú, no ha transitado el último tercio del siglo XX con una violencia insurgente que se enfrentó al Estado y cuyo producto final es un baño de sangre por ambas partes. Sin embargo, la paradoja es que Ecuador, en los años veinte del actual siglo XXI, enfrenta niveles de violencia, no solo superiores a sus dos vecinos, sino que no encuentra prácticamente parangón en el ecosistema latinoamericano.

¿Hay entonces algún hilo histórico que conecte el décimo aniversario de los acuerdos de paz en Colombia con la situación de excepcionalidad que vive el Ecuador? En la primera parte de este artículo se explorará el contexto de esperanza que generaron en Ecuador, al final del gobierno de Rafael Correa, unos acuerdos de paz que coincidían con el principio de una crisis en la bajada de los precios del petróleo y que, prácticamente, representaban una de las pocas buenas noticias con las que el gobierno ecuatoriano iba a terminar su mandato. Paradójicamente el concepto de paz que tenía el gobierno conservador de Santos en Colombia no era muy diferente del que proyectaba el gobierno progresista de Correa en Ecuador. Ambos aspiraban a que los países andinos implementasen políticas de seguridad soberanas basadas en la cooperación entre los países de la región. Durante el gobierno de Correa la única guerrilla ecuatoriana que puso en ciertos aprietos al Estado ecuatoriano, “Alfaro Vive Carajo”, desapareció al entender que las premisas por las que se había alzado en armas (la lucha antiimperialista y la justicia social) habían sido en parte cumplidas por dicho gobierno. El gobierno de Santos también supo ejercer la diplomacia para que la principal amenaza del Estado Colombiano, las FARC-EP, depusieran las armas durante su mandato. Ahí tenemos un hilo histórico dónde ambos gobiernos entendieron el fenómeno de la violencia política, no únicamente desde la contienda entre actores políticos (Estado y guerrilla), sino desde una aproximación multidimensional que explora las causas estructurales del conflicto.

Si el gobierno de Correa terminaba su mandato en mitad de una crisis económica y política, al comienzo de dicho gobierno (en pleno *boom* petrolero y con altas tasas de aprobación social) le tocó vivir la mayor crisis de la historia reciente entre los dos países cuando, en 2008, el gobierno colombiano de Álvaro Uribe bombardeó un campamento de las FARC-EP que se encontraba en territorio ecuatoriano. El asesinato del segundo al mando de la guerrilla, Raúl Reyes, retrataría las dos grandes corrientes políticas que marcarían la historia contemporánea de ambos países. Por un lado, el *uribismo* no solo representará a aquellos colombianos que se opondrán a los acuerdos de paz, sino que también será capaz de crear una especie de *ethos* cultural y político donde la “ley y el orden” habrían de prevalecer sobre cualquier otro precepto. Por otro lado, el correísmo en Ecuador y su “Revolución Ciudadana” representará el movimiento modernizador más importante en la historia del país, solo por detrás, posiblemente, de la Revolución liberal que lideró el militar Eloy Alfaro entre finales del siglo XIX y principios del XX. La persecución que sufrió Eloy Alfaro al dejar el poder (que acabó con su asesinato) por parte de fuerzas conservadoras que veían en él una amenaza a la civilización cristiana, que había traído la colonia española, puede ser comparada de alguna forma con la que vivió también Rafael Correa, quien reside en Europa desde 2017 alegando una persecución política contra su persona.

En la segunda parte del artículo exploraremos precisamente el cambio de rumbo político que vivirán tanto Colombia (con el gobierno de Iván Duque) como Ecuador (con el gobierno de Lenín Moreno), con la llegada al poder de gobiernos conservadores que harán un giro en la política de seguridad. La doble crisis (económica, por la crisis del petróleo, y de seguridad, por el cambio en las rutas del narcotráfico), hará que las desigualdades aumenten en ambos países y las revueltas populares cuestionen hasta qué punto la doctrina neoliberal de “menos Estado” podía ser compatible con la solución de los problemas de los ciudadanos. La respuesta a esta crisis será opuesta en ambos países. En Colombia, el “espíritu de los acuerdos de paz” volverá con la victoria de Gustavo Petro. Por el contrario, en Ecuador los gobiernos de Lenín Moreno primero y Guillermo Lasso, con el narcotráfico infiltrándose no solo en los poderes políticos, sino también haciéndose con el control de buena parte de las cárceles, dejarán el terreno libre para el comienzo del “laboratorio ecuatoriano”.

En la tercera parte del ensayo desarrollaremos precisamente la secuencia de eventos que posibilitaron la creación de este “laboratorio regional”. Algunos fueron no elegidos (como la toma de un canal de televisión o la fuga de uno de los narcotraficantes más peligrosos) y otros, en cambio, se convirtieron en el ADN (por usar las siglas del partido político de Daniel Noboa) del gobierno, como la designación de “grupos terroristas” a grupos delincuenciales, o la extracción ilegal de un político ecuatoriano como Jorge Glass que se encontraba asilado en la embajada de México.

Como veremos en las conclusiones, la reciente Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, basada en la reinterpretación de la Doctrina Monroe para “restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental” (CTXT, 2026), no solo encaja a la perfección con el plan

de seguridad del gobierno de Daniel Noboa en Ecuador, sino que este país será uno de los alumnos más aventajados de la nueva estrategia imperial de “reclutar y expandir” (CTXT, 2026). Precisamente el legado de los acuerdos de paz en Colombia, basado en una justicia transicional, donde enemigos históricos tratan de dejar atrás sus diferencias, representará lo opuesto a la estrategia política que aplicó el gobierno de Noboa en Ecuador. Antes incluso que el gobierno Trump en Estados Unidos, el gobierno de Noboa será pionero en el continente americano en apostar todo su capital político a la búsqueda y derrota del “enemigo interno”.

2. Una primera esperanza

La firma del Acuerdo de Paz en septiembre de 2016 entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, no solo fue el acontecimiento más importante de la historia reciente de Colombia que, desde el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán en 1948, había vivido prácticamente un periodo ininterrumpido de guerra perpetua, sino que también representó, para América Latina, la primera vez en la que dos actores políticos que habían sido enemigos históricos y que se encontraban en una situación de confrontación ideológica y militar derivada de la Guerra Fría, lograban sentarse a negociar.

En la región más violenta del mundo, este hecho sentó un precedente. Y el proceso no fue fácil. Hay que recordar que en octubre de 2016 un 50,2% (BBC, 2016) de los colombianos dijo “no” en el plebiscito por los acuerdos de paz con las FARC-EP, y el gobierno de Santos no tuvo más remedio que recoger algunos puntos de la oposición *uribista*. Finalmente, el acuerdo de paz terminó aprobándose por vía legislativa.

La firma del acuerdo ponía, simbólicamente, fin a una Guerra Fría en uno de los países con mayor desigualdad social del mundo como Colombia y por lo tanto abría una ventana de oportunidad para que su clase política pudiese lidiar con este problema de una forma no violenta. Aunque los latinoamericanos en 2016 aún vivieran las consecuencias de la Guerra Fría (como la vigencia de las revoluciones cubana y sandinista), no cabía duda de que las nuevas clases medias emergentes buscaban vías no violentas a los grandes problemas que en el actual siglo XXI siguen sin resolverse en la región.

Uno de los gobiernos que recibió con más ilusión la firma de los acuerdos de paz fue el de Rafael Correa en Ecuador. Hay que recordar que este gobierno había vivido en 2008 uno de los episodios más difíciles de la relación histórica entre estos dos países, cuando el gobierno colombiano de Álvaro Uribe había decidido bombardear un campamento provisional de las FARC-EP que se encontraba en la provincia de Sucumbios, situada al noreste del Ecuador haciendo frontera con Colombia. Las consecuencias de la Operación Fénix, con decenas de muertos y sobre todo con el asesinato del que en ese momento era el segundo comandante de la guerrilla, Edgar Devia (alias Raúl Reyes), fortalecieron al gobierno de Uribe dentro de su país, que consiguió asestar un importante golpe moral a la insurgencia armada.

Sin embargo, esta acción también debilitó al gobierno de Uribe regionalmente en el marco del Plan Colombia que había empezado en 1999 con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, y que buena parte de los líderes progresistas de la región consideraron esta alianza militar como una interferencia más de los Estados Unidos sobre la región. En este sentido, bajo la sombra del ataque y la violación de la soberanía nacional del Ecuador estos líderes progresistas (desde Hugo Chávez en Venezuela, hasta Néstor Kirchner en Argentina pasando por Lula Da Silva en Brasil) sospecharon que detrás estuvo la influencia del gobierno de George W. Bush (Moscoso Larenas, 2014). Raúl Reyes, que en el momento del asesinato era el encargado de negociar la liberación de rehenes, se encontraba en conversaciones con el presidente de Venezuela Hugo Chávez y el presidente de Francia Nicolás Sarkozy para la liberación del congresista colombiano/francés Ingrid Betancourt. Su asesinato por lo tanto se interpretó por los sectores progresistas latinoamericanos como una intentona más del presidente Uribe de no apostar por la vía negociada del conflicto, y de apostar por lo tanto por la confrontación armada como la única vía para acabar con él.

Fueron precisamente los acuerdos de paz entre el gobierno de Santos y las FARC-EP los que de forma implícita pusieron fin a un Plan Colombia que se creó precisamente con la idea de derrotar al enemigo interno que era el gobierno de Correa (2007-2017), pues Ecuador era un país de tránsito, se había focalizado en controlar de tráfico de drogas y evitar que los puertos del país fueran el embarque para que estas fueran distribuidas por diferentes rutas marítimas (De Castro García y Avellaneda Vera, 2019). La no renovación de la base militar de Estados Unidos en 2009 en la ciudad costera de Manta, considerada por parte de buena parte del *establishment* conservador latinoamericano como una

“expulsión”, fue otra prueba de la voluntad de este gobierno ecuatoriano de llevar una política soberana en materia de seguridad. El hecho de que todos los gobiernos posteriores al de Correa (Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa) dieron un giro de 180 grados en su política de seguridad y se alinearon con la Administración para el Control de Drogas (DEA), organismo que priorizó la represión directa contra el narcotráfico, muestra el eterno conflicto de países andinos como Ecuador en la dificultad de llevar a cabo una política soberana en materia de seguridad.

El Acuerdo de Paz en 2016 tenía lugar en Colombia en un contexto en el que las FARC-EP, a pesar de tener una potencia militar del tamaño de un ejército regular (con decenas de miles de combatientes) que controlaba amplias zonas de terreno del país, vivía desde hace años una deslegitimación constante entre la población colombiana, en parte porque sus fuentes de ingresos provenían en parte del narcotráfico. La sensación de alivio que sintió el gobierno de Rafael Correa con la llegada de los acuerdos de paz venía precisamente en que, debido a la mutación del conflicto (donde a partir de los años ochenta el grupo armado empieza a cobrar impuestos a los cultivadores de coca), los miles de refugiados colombianos que llegaban cada año a Ecuador suponían un constante desafío para sus autoridades (Ordoñez, 2017).

Por último, es relevante destacar que los acuerdos de paz en Colombia llegan tan solo dos años antes de que empezase el desplome de los precios del petróleo. El gobierno de Rafael Correa había alcanzado su mayor cota de popularidad durante el primer mandato, precisamente antes de la llegada de estos acuerdos y cuya plena bonanza petrolera (2007-2012) permitió realizar grandes inversiones en infraestructuras. Sin embargo, durante el segundo mandato (2012-2017) la caída del precio del crudo coincide con acusaciones de corrupción al Gobierno, en un clima donde el descontento popular aumenta cuando las clases medias, que en parte había creado el *correísmo*, se empiezan a volver contra él al no ver satisfechas sus nuevas necesidades. En este contexto de crisis, los colombianos, así como los venezolanos que llegaban a Ecuador sobre todo desde la crisis que desata la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, eran recibidos con desconfianza por una parte considerable de ecuatorianos que los veían como una amenaza para sus puestos de trabajo, así como con una vinculación (real o imaginaria) con la delincuencia organizada en el país.

Hasta los acuerdos de paz de 2016, Ecuador y Colombia, aunque países vecinos, transitaron por recorridos históricos bien diferentes. Colombia había representado el país latinoamericano por excelencia donde la Guerra Fría “nunca acabó”. Desde que se desató “La Violencia” con el asesinato del líder Eliecer Gaitán en 1948 y lo que se conoció como “El Bogotazo” donde las masas campesinas pasan por primera vez de la resistencia a la creación de guerrillas campesinas (Leech, 2011; Matta, 1939). Colombia transitó el siglo XX desde una doble vertiente: por un lado, en una región como Latinoamérica con las mayores desigualdades del planeta, Colombia era el país donde las luchas guerrilleras, a pesar de no haber sido efectivas en la toma del poder, representaban para un sector de la población un gran contrapoder a los intereses de los grandes latifundistas. Sin embargo, por el otro lado, los episodios de extrema violencia que han desencadenado estas guerrillas (con secuestrados que vivían encadenados durante largas temporadas) pusieron a Colombia como el ejemplo que los países latinoamericanos debían evitar.

En este sentido, hay que encuadrar a Ecuador en una narrativa totalmente opuesta a la colombiana. La única guerrilla que había supuesto una relativa amenaza al Estado fue ¡Alfaro Vive Carajo!, una especie de subproducto del M-19 que en tan solo tres años (1983-1986) había quedado prácticamente inoperativa debido a las políticas represivas del gobierno conservador de León Febres Cordero (Buckley, 2026). A diferencia de Colombia, el “gran conflicto” de Ecuador, sobre todo en el cambio de siglo, lo representaron los sucesivos levantamientos indígenas. Estos levantamientos, producto de políticas neoliberales que empobrecían a los sectores rurales donde la población indígena servía como mano de obra, representaban una ruptura del estatus quo ecuatoriano. La nación moderna ecuatoriana se basaba en un imaginario que el sociólogo Agustín Cueva había denominado como “mistificación del mestizaje”, donde una supuesta “fusión armoniosa” de culturas encubría sistemas de desigualdad económicos y culturales que Ecuador arrastraba desde el periodo colonial (Cueva, 1967).

En la siguiente sección analizaremos como precisamente el “posconflicto” colombiano desembocará, en formas más directas (las rutas del narcotráfico) o indirectas (los nuevos espacios que ocupan actores criminales que aprovechan la retirada de las guerrillas) en un conflicto armado interno en Ecuador, representando el periodo más violento de su historia reciente del país (2021-2026) (De Castro García y Avellaneda Vera, 2019). Precisamente el fracaso de los gobiernos al intentar lidiar con las consecuencias de este posconflicto (Lenín Moreno 2017-2021, Guillermo Lasso 2021-2023 y Daniel

Noboa 2023-actualiad) será traducido por los movimientos sociales en la incapacidad de articular una candidatura política que pueda ofrecer una propuesta política realista para el país. Las consecuencias del posconflicto colombiano en Ecuador estriarán precisamente en que este último, a diferencia del vecino país, al no tener una tradición de movimientos sociales mestizos que representen un contrapoder a las élites económicas extractivistas, quedará durante años expuesto a unas dinámicas donde las acciones ineficaces en materia de seguridad de los diferentes gobiernos neoliberales solo serán contestadas en la protesta social por un movimiento indígena que representará la última frontera que el narcotráfico tratará de ocupar (Córdova-Alarcón, 2026).

3. La frustración colombiana y el cambio de paradigma en Ecuador

La esperanza que suscitaron los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos se tradujo, primero, en la constancia de que la desaparición de la guerrilla no se debió a que se hubiera superado la principal razón de su nacimiento: las profundas desigualdades sociales que arrastra Colombia. El triunfo del conservador Iván Duque, representando a un *uribismo* que capitalizó el resentimiento de parte de una sociedad colombiana descontenta por las medidas pactadas de justicia transicional (por ejemplo, en que varios de los militantes de las FARC evitaran la cárcel a cambio de participar en una Comisión de la Verdad) fue el primer gesto de rechazo al proceso. Sin embargo, como han señalado los politólogos Cesar Niño y Emerson Deva-Acevedo, más allá de la embestida al proceso que representó el gobierno de Duque (2018-2022) o el concepto de “Paz Total” que prometió Petro en su llegada al poder (2022), las principales amenazas para el Estado Colombiano desde el cese definitivo de la violencia de las FARC-EP han sido “la proliferación de grupos disidentes, la persistencia de actividades ilícitas por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la consolidación de estructuras criminales entre las que se encuentra el Clan del Golfo” (2019).

En este contexto el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador (2017) pronto se desentenderá de su predecesor Rafael Correa para acabar imponiendo sobre la población una serie de políticas de ajuste económico después de haber llegado a un pacto con el Fondo Monetario Internacional. En un contexto de descontrol (la pelea de distintas bandas delincuenciales por hacerse con el territorio que dejan las FARC) en la frontera colombiana, el gobierno de Moreno será testigo de cómo Ecuador, país dolarizado, se acabará convirtiendo en uno de los destinos preferidos para que los narcos colombianos o mexicanos puedan lavar su dinero (De Castro García y Avellaneda Vera, 2019). Empezaba así una serie de políticas fracasadas en materia de seguridad (no hay ninguna estadística que pruebe lo contrario) en una serie de gobiernos ecuatorianos que aprovecharán el vacío dejado por las FARC-EP para promover una serie de medidas securitizadoras en forma de grandes operativos. Este vacío de una guerrilla cuyo corpus ideológico se basaba originariamente en la lucha por la repartición de la tierra, cuyo lugar lo ocupan una serie de redes de narcotráfico cuya motivación política será difícil de identificar, proponía la narrativa perfecta para un cambio hacia una política de seguridad de “choque frontal” contra el enemigo. Incapaces de frenar la expansión de estas redes de narcotráfico, la política de seguridad de los gobiernos conservadores posteriores a Correa acabará facilitando la penetración de estas redes en todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana. Como uno de los hechos más destacables, en 2021, el embajador de Estados Unidos Michael Fitzpatrick acabó formalizando una queja ante el gobierno de Lenín Moreno debido a la existencia de “narcos generales” entre las fuerzas de seguridad ecuatorianas (CNN en Español, 2021).

En este sentido, hay que entender los años posteriores a los acuerdos de paz en 2016, entre el gobierno de Santos y las FARC-EP, en Colombia como un proceso por el cual los distintos gobiernos ecuatorianos entendían el concepto de seguridad como algo separado y autónomo de “lo político”. Como ha señalado el antropólogo Norman Whitten Ecuador, sobre todo en los años noventa cuando el movimiento indígena fue el más poderoso del continente americano con sus levantamientos, había sido constantemente catalogado por las clases conservadoras como la “Cuba de los Andes” (2003):. Precisamente para el *establishment* ecuatoriano, el hecho de que el Estado hubiera conseguido evitar la existencia de unas “FARC” en el país (o, en otras palabras, una guerrilla lo suficientemente grande que amenazara sus intereses) era una prueba de que este país andino había “hecho sus deberes” en lo que llevamos de siglo XXI. Hay que tener en cuenta que el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), que aprovechó el boom petrolero para la creación de grandes infraestructuras y crear ciertos mecanismos de repartición de la riqueza, ha de ser considerado como una isla de estabilidad en la historia reciente

del país. Es necesario contextualizar cómo el movimiento indígena en los noventa realizó cuatro levantamientos (90, 92, 94 y 97), y después de que finalizase el gobierno de Correa, acabó realizando otros dos (2019, 2022). La “Cuba de los Andes”, por lo tanto, hace referencia a un Ecuador donde, en su historia reciente, tan solo el gobierno de Rafael Correa ha logrado una cierta estabilidad institucional que le permitió llevar a cabo políticas con una visión de medio/largo plazo (Hidalgo Flor, 2021).

El acercamiento a las políticas de seguridad de Estados Unidos, siempre interesado en que los países andinos lleguen a acuerdos bilaterales (donde la gran potencia les vende asesoramiento y tecnología militar) y no tanto en la posibilidad de que exploren la cooperación entre ellos, vio su culmen en 2018. En ese año el gobierno de Moreno hacía que Ecuador se retirase como país garante de paz y cesara su participación en las conversaciones con el ELN en un contexto donde varios periodistas del diario El Comercio habían sido asesinados en territorio colombiano por un grupo disidente de las FARC (De Castro García y Avellaneda Vera, 2019).

En este contexto de violencia generalizada, donde la desaparición de actores políticos como las FARC-EP da lugar a escisiones que tienen cada vez más lazos con los grupos narcotraficantes, y donde, a su vez, la única gran guerrilla activa que queda en Colombia: el ELN asume una estrategia parecida a la de las FARC en la que prevalece más su supervivencia como organización que los objetivos políticos para los que fue fundada (la lucha por la igualdad social), tiene lugar en Ecuador el primer gran levantamiento indígena del siglo XXI. Lenín Moreno, en aras de cumplir su acuerdo con el FMI, lleva a cabo una política de recortes sociales, y poco a poco empieza a aparecer desnutrición en las áreas rurales del país, que como paradoja es uno de los más biodiversos del mundo (Mideros Mora, A. I. y Aguirre-Armijos, A., 2022).

El contexto de represión del levantamiento, donde hubo decenas de muertos y heridos como consecuencia de unas fuerzas de seguridad lideradas por la ministra de gobierno María Paula Romo que no dudó en usar bombas lacrimógenas caducadas como demostró una investigación periodística (El País, 2022), solo puede enmarcarse en un contexto “posacuerdos de paz” en Colombia. Las protestas, donde por primera vez en la historia un gobierno ecuatoriano cambió la sede de gobierno de Quito a Guayaquil, representaron “la tumba política” de un gobierno como el de Moreno que finalmente cedió a las demandas originales del movimiento indígena que exigían que volviese el subsidio del diésel y la gasolina. Los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Santos representaban un escenario en Colombia donde, por primera vez, el gran conflicto por la repartición de la tierra y la lucha por la justicia social se resolvían en un acuerdo político. Y, sin embargo, las consecuencias de dichos acuerdos, como la desmovilización de las FARC-EP y el consecuente cambio en las rutas de narcotráfico, así como la llegada al poder de distintos gobiernos conservadores en América Latina que imponían políticas de austeridad, trajo consigo movilizaciones y revueltas.

Como señalaban los economistas Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro, la crisis del petróleo provocó que el gobierno de Lenín Moreno tratara de combinar políticas de austeridad con un nuevo *boom* minero (2020). Esta incapacidad de las élites económicas de seguir acumulando riqueza en un contexto de crisis post petrolera también llegó a Colombia y a Chile, donde los gobiernos conservadores, tanto de Iván Duque como de Sebastián Piñera, se enfrentaban a los legados oligárquicos que los habían llevado al poder. En Chile, el estallido social surgió en contra de la arquitectura constitucional en la que el dictador Augusto Pinochet (1973-1990) había blindado una constitución que promulgaba unas bases económicas neoliberales y que para los manifestantes era la base de las desigualdades que arrastraba el país en el actual siglo XXI.

En Colombia, al igual que en Chile, los jóvenes tuvieron un papel muy importante en las protestas de 2019. En un imaginario colombiano donde los acuerdos de paz de 2016 abrían una nueva oportunidad para que el país sanara sus heridas históricas, sobre todo en materia de justicia social, el continuo asesinato de líderes sociales durante el gobierno de Duque era interpretado por los manifestantes como la no voluntad del gobierno para sanar dichas heridas. Por lo tanto, el ciclo de movilizaciones que se inicia en Ecuador, y que más tarde llega a Colombia y a Chile, debe ser interpretado en un marco donde el concepto de seguridad está unido al de justicia social. Un imaginario que irá cambiando en los años venideros, y que dejará los históricos acuerdos de paz entre dos enemigos históricos, como las FARC-EP y el Estado colombiano, en un terreno anecdótico en una región donde la consolidación de las derechas populistas profundizará una herida abierta en América Latina: el diálogo entre actores políticos de ideologías diferentes será sustituido por una versión moral de la sociedad en donde unos representarán los guardianes cuyo objetivo será preservar el orden civilizatorio occidental

mientras que el resto (desde operadores del narcotráfico hasta movimientos progresistas) ocuparán el lugar (de forma involuntaria) que desafía dichos principios.

4. De la “Paz Total” de Petro al “laboratorio” de Noboa

En 2021, la victoria del banquero Guillermo Lasso en Ecuador representó una continuación de las políticas que había desarrollado su predecesor Lenin Moreno. Un estado debilitado económicamente por las deudas que había contraído con el Fondo Monetario Internacional y que, ante el avance tanto de las desigualdades sociales como de la inseguridad, el gobierno de Lasso se excusa en su “inacción” precisamente por el estancamiento económico que arrastraba el país desde que se desplomaron los precios del petróleo al final del gobierno de Correa (2014-2015). La geógrafa Sara Radcliffe ha sostenido que estados post coloniales como Ecuador han dedicado su existencia (poco más de 200 años) a tratar de consolidar su soberanía (2001). En este sentido, durante la pandemia de la Covid-19, las imágenes de la ciudad costera de Guayaquil, (con ataúdes de cartón en las calles y neveras para guardar a los muertos), dieron la vuelta al mundo (France 24, 2020). El levantamiento indígena de 2022, con unos precios agrícolas disparados que traían por primera vez en décadas desnutrición infantil en las áreas rurales del país, desembocaron en la muerte política de Guillermo Lasso. Volviendo a Radcliffe, ante la desconfianza progresiva de los ciudadanos hacia unas instituciones incapaces de brindarles servicios mínimos en áreas imprescindibles de la vida (alimentación y seguridad), el movimiento indígena se erigió como el único contrapoder capaz de canalizar esa soberanía perdida del Estado ecuatoriano.

Como ha señalado el antropólogo Eduardo Khon, a partir de la conquista española en los años treinta del siglo XVI, complejos sistemas culturales que regían comunidades transversales geográficamente como los Jívaro o los Cañari, fueron poco a poco disueltos en categorías más simplificadoras y estáticas como “lo andino” o “lo amazónico” (2002). La llegada al poder de Daniel Noboa en 2023, en un escenario donde el narcotráfico había conseguido infiltrarse en todos los poderes del Estado, representa posiblemente el momento en la historia del Ecuador donde, desde la fundación del Estado en los años treinta del siglo XIX, se encontraba más dividido. Si en Colombia la victoria de Gustavo Petro en 2022 representaba, gracias al embrión de los acuerdos de paz de 2016, la primera vez que una fuerza política de izquierdas llegaba al poder con la idea de cohesionar una sociedad fracturada durante décadas por la violencia, Daniel Noba, hijo del empresario bananero más rico del país, representaba su némesis. El movimiento indígena, que desde que terminó el gobierno de Rafael Correa (2017) había canalizado con sus dos levantamientos (2019, 2022) el hilo histórico que cohesionaba al país en contra de las injusticias se encontraba ante un gobierno que, como en los tiempos de la colonia, solo se sentirá capacitado para gobernar el territorio usando imaginarios que simplificasen y, a la vez, que confrontasen entre sí a sus habitantes.

Si Petro había ganado las elecciones con un concepto de “Paz Total” en 2022, Noboa se había garantizado el apoyo de buena parte de los ecuatorianos en 2023 prometiendo “mano dura” contra el crimen, tratando de representar la versión 2.0 del gobierno de Nayib Bukele en el Salvador. A lo largo de 2024, cuatro acontecimientos desencadenaron lo que en este artículo hemos denominado el establecimiento del “laboratorio ecuatoriano”.

El 7 de enero Adolfo Matías (alias “Fito”), líder de la banda de “Los Choneros”, se fugó de la cárcel Regional de Guayaquil, dejando en evidencia a un gobierno de Noboa que precisamente había hecho de la seguridad el *leitmotiv* de su proyecto de país. Tan solo dos días más tarde, el canal público “TC Televisión” es asaltado por una serie de jóvenes (la mayoría adolescentes) que más tarde se sabrá que formaban parte de la banda de “Los Tiguerones”. La puesta en escena, enseñando fusiles y explosivos, traumatizó a buena parte de la sociedad civil, que entendió el asalto como un desafío de estas bandas a un gobierno que había tomado represalias tras la fuga de Fito.

Para el antropólogo Jorge Núñez la fuga de Fito se produjo después de que los sucesivos gobiernos ecuatorianos (desde Lenin, hasta Lasso, pasando por Noboa), en aras de satisfacer a la embajada de Estados Unidos en incautaciones de droga, concedieran beneficios penitenciarios a varios presos por narcotráfico a cambio de información (BBC Mundo, 2024). Si el peligro para la “Paz Total” de Petro en Colombia fue que, una vez desmovilizada las FARC-EP, algunas escisiones de esta guerrilla (así como el ELN) dejaran atrás su “vocación política” para concentrarse en actividades criminales, la sobrepoblación en las cárceles ecuatorianas (donde las bandas criminales se hacían cada vez más con el control) indicaba el proceso contrario: bandas como “Los Choneros” o los “Tiguerones”, que hacía años

no tenían prácticamente incidencia en la vida política del país, habían desarrollado tales capacidades logísticas que empezaban a reclamar su lugar dentro del Estado Ecuatoriano.

El tercer acontecimiento (después la fuga de Fito y la toma del canal TC Televisión) que hizo de Ecuador un laboratorio para experimentar con métodos coercitivos, fue la declaración del gobierno de Daniel Noboa en esos primeros días de enero de 2024 de “conflicto armado interno” como parte de su “Plan Fénix”. Al activar el derecho internacional humanitario contra bandas criminales y categorizarlas como “terroristas”, a las fuerzas de seguridad ecuatorianas se les permitía usar la fuerza letal contra miembros de estos grupos. A partir de ese momento, Ecuador será el primer país en todo el continente en aplicar la categoría legal de “terroristas” a bandas criminales. Ni México (en su guerra contra los cárteles que comienza en 2006), ni Brasil (en su guerra contra las bandas en las favelas), ni Colombia (que utilizó la categoría de terroristas únicamente a la insurgencia armada política), ni siquiera El Salvador de Nayib Bukele utilizó el Derecho Internacional Humanitario para atacar a las pandillas.

El “laboratorio ecuatoriano” del gobierno de Noboa haría que en los próximos años el país viviera en la declaración continua de Estado de Excepción (11 en 27 meses de presidencia) (La Hora, 2026). Durante este tiempo los grupos criminales pasaron a ser “enemigos militares”, y las fuerzas de seguridad ecuatorianas pasarían a recibir constantes indultos y amnistías en sus incursiones contra dichos enemigos. Por último, la categoría de “conflicto armado interno” abría también la posibilidad a futuras alianzas militares. Sin embargo, antes de que estas alianzas con Estados Unidos se hicieran palpables, tenía que pasar otro acontecimiento que también haría de Ecuador un laboratorio en referencia a la excepcionalidad de sus instituciones en materia de seguridad.

El 4 de abril de 2024, unos policías encapuchados entraron en la embajada de México en la ciudad de Quito y se llevaron por la fuerza al exvicepresidente Jorge Glas. En un contexto donde el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había declarado que las primeras elecciones que ganó Noboa fueron condicionadas por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio (cuya viuda había acusado a las “fuerzas del progresismo” de estar detrás del asesinato) (El Universal, 2024), el gobierno de Noboa había respondido declarando persona “non grata” a la embajadora mexicana. Teniendo una orden de detención preventiva, el gobierno de AMLO decide dar asilo a Jorge Glas, en un contexto donde parte de la cúpula del partido político de Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, había “huido” a dicho país alegando una persecución judicial por parte del Estado ecuatoriano. Según *The Economist*, había suficientes pruebas contra Glass para probar que era culpable de una serie de casos de corrupción, y a la vez las medidas de excepcionalidad que se habían llevado a cabo por parte del Estado ecuatoriano (la nulidad por parte de la Corte Nacional de uno de los casos, o la selectividad en la causa por peculado donde intervenían más de 100 funcionarios) probaban también la existencia de *lawfare* contra el expresidente (2024).

El asalto a la embajada de México, sin precedente en la historia de América Latina, añadía otro cimienta al laboratorio ecuatoriano. A pesar de sufrir una condena internacional (en la Cumbre Iberoamericana que se celebró a finales de ese 2024, la gran mayoría de los 22 jefes de Estado decidió declinar la invitación), Noboa logró construir una narrativa interna de “hombre fuerte” que afianzó su base electoral y polarizó aún más a la sociedad ecuatoriana. La utilización del Derecho Internacional Humanitario para combatir la represión interna, o la violación del mismo Derecho Internacional con la extracción Jorge Glass de la embajada Mexicana, eran medidas pioneras en la región, que curiosamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en parte también implementará durante su segundo mandato que dará comienzo a principios de 2025. Estamos hablando por lo tanto de los comienzos del “laboratorio ecuatoriano”.

También a principios de 2025, la “Paz Total” de Petro, como extensión de los acuerdos de paz de 2016, sufrió un serio revés con la “masacre de Catatumbo”, cuando el ELN decidió lanzar una ofensiva en esta región del norte de Colombia con la excusa de expulsar a varias disidencias de las FARC-EP que se habían asentado en el territorio y que conllevó el desplazamiento forzado de más de 40.000 personas (El País, 2024). Ecuador, que, a pesar de las promesas de “mano dura” del gobierno de Noboa, vivía en 2025 el año más violento de su historia (Primicias, 2025), creaba a su “némesis” en el gobierno de Petro, cuyas dificultades en tratar de negociar con los distintos grupos armados probaba, tanto a los sectores más conservadores colombianos como ecuatorianos, que solo a través de la confrontación directa y valiéndose de la tecnología de los poderosos Estados Unidos, era posible hacer frente a las bandas criminales.

Esta confrontación directa se cobró, a finales de 2024, sus primeras “víctimas de guerra”, cuando las fuerzas de seguridad ecuatorianas encontraron cuatro cuerpos calcinados de adolescentes entre 11 y 15 años. La sentencia del 24 de febrero del 2026 dictaminó 34 años de prisión para 11 militares de la

Fuerza Aérea que además se demostró que habían hecho un “pacto de silencio” después de asesinarlos en el barrio de las Malvinas, perteneciente a la ciudad costera de Guayaquil (BBC News Mundo, 2025). Si en marzo de 2026 la Corte Constitucional del Ecuador sentenció el caso de “los niños de las Malvinas” como una desaparición forzada cometida por el Estado, parece que estas políticas del gobierno de Noboa evocan a los “falsos positivos” producto de la política de Seguridad Nacional llevada a cabo por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2006-2009) en el marco de la política de “Seguridad Democrática”.

El “Plan Fénix” armado por el gobierno de Daniel Noboa sería entonces una especie de doctrina de “Seguridad Democrática” 2.0 donde los “Falsos Positivos” (las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad colombianas a población civil que más tarde camuflaron como guerrilleros muertos en combate) en el escenario ecuatoriano equivaldría a unas fuerzas de seguridad ecuatorianas deseosas de cumplir con las estadísticas (incautaciones, detenciones, etc.) que les exige el gobierno. Como ha señalado Luis Córdova, “la declaratoria de guerra interna en Ecuador tiene una funcionalidad ambivalente: un fracaso como estrategia de seguridad, pero un éxito como estrategia política” (2026). La diferencia con doctrinas de seguridad parecidas en otros países latinoamericanos (a la comparación de Uribe en Colombia habría que añadir la de El Salvador de Nayib Bukele) cuyas violaciones de derechos humanos sí dieron ciertos resultados en materia de seguridad, en Ecuador la “espectacularidad” de las acciones (con *reels* que el gobierno comparte en redes sociales) no ha conllevado ningún resultado concreto en materia de seguridad para la población.

Como ha señalado la antropóloga Rita Segato “a diferencia de la “violencia instrumental”, necesaria en la búsqueda de un cierto fin, la violencia expresiva engloba y concierne unas relaciones determinadas y comprensibles entre los cuerpos, entre las personas, entre las fuerzas sociales de un territorio” (Segato, 2006). No se puede entender el laboratorio ecuatoriano basado en esa violencia expresiva sin el marco de como las nuevas derechas latinoamericanas (como el gobierno de Javier Milei en Argentina o el de José Antonio Kast en Chile) han llegado al poder desde la fórmula de la reinterpretación de la historia (El Hilo, 2026). Las continuas acusaciones de Noboa acerca de cómo la expansión del narcotráfico en Ecuador comenzó durante el gobierno de Rafael Correa (en ese periodo Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina por detrás de Uruguay), se conjugan con unas políticas donde, tan solo cuatro meses después de perder una consulta popular (2025) una de las preguntas hacía referencia a la instalación de bases militares en el país y Noboa llega a un acuerdo con el gobierno de Donald Trump para lanzar operaciones militares conjuntas. Volviendo a Segato, la alianza militar entre el gobierno de Trump y el de Noboa señala un momento de “violencia expresiva” en forma de *reality* de televisión donde “el cómo” es más importante que “el qué”.

En marzo de 2026 el gobierno de Daniel Noboa vuelve a ser pionero en expulsar, sin justificación diplomática, al embajador de Cuba en Ecuador. Tan solo unos pocos días después, las fuerzas militares ecuatorianas realizan, junto con el Comando Sur de Estados Unidos, un bombardeo a un supuesto campamento de las disidencias de las FARC en la provincia amazónica de Sucumbíos. Pocos días después, en un artículo del New York Times, los periodistas revelan que la zona bombardeada en realidad era una granja lechera (2026). Volviendo otra vez a Segato, la máquina informativa que permite al gobierno de Noboa realizar un acto de soberanía que consiste en “hacer vivir o dejar morir” (2006), solo es posible mediante la construcción de un imaginario nacional donde la excepcionalidad rija la vida cotidiana de los ciudadanos. El laboratorio ecuatoriano como lugar donde lo que no se ha hecho, aún puede realizarse.

5. Conclusiones

El 16 de marzo de 2026 las fuerzas de seguridad colombianas encontraron, en la frontera con Ecuador, una bomba que había sido tirada desde un avión del ejército ecuatoriano. La frontera entre Colombia y Ecuador consta de 586 kilómetros, y está compuesta por ríos, bosques tropicales, manglares o páramos, que han dificultado históricamente el paso entre ambos territorios. El hecho de que, para marzo de 2026, Colombia era el mayor productor de cocaína del mundo y Ecuador el mayor exportador, indica no solo que la bomba de 227 kilos de fabricación estadounidense que se encontró en la frontera de ambos países representaba un punto caliente entre dos Estados fallidos en políticas de seguridad, sino que también representa una especie de “vuelta” al pasado.

Si el Estado colombiano, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, había realizado una ejecución extrajudicial sobre el comandante de las FARC en 2008 provocando una crisis diplomática en ambos países, el gobierno de Noboa en Ecuador, en un marco de alianza militar con el Comando Sur de

Estados Unidos, también realizó bombardeos en la frontera con la mala suerte que una bomba se cayó sin explotar, y terminó arrastrándose unas decenas de metros hasta territorio colombiano. Dicho de otra forma, si los colombianos, con los acuerdos de paz alcanzados en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP trataron de “pasar la página” a unas políticas confrontativas en materia de seguridad que habían desembocado en decenas de miles de muertos, ¿por qué Ecuador no ha sabido aprovechar estas medidas tomadas en materia de justicia transicional por parte de su vecino Colombia para seguir avanzando hacia una aproximación del concepto de seguridad más holística y basada en la cooperación entre Estados de la región?

Este artículo ha tratado de explicar como el llamado “posconflicto” colombiano desde que se sella la paz en 2016 ha coincidido con un doble fenómeno en Ecuador: el de la bajada de los precios del petróleo a partir de 2014 y, a su vez, el cambio de las rutas del narcotráfico como consecuencia de la desmovilización de las FARC. Este doble desafío hubiera requerido un Estado ecuatoriano “fuerte”, que realice políticas soberanas en las que la lucha contra el narcotráfico se basara en la cooperación con los países vecinos, así como en fortalecer las agencias de seguridad, propiciando un proceso de justicia transicional para analizar hasta qué punto las redes criminales se han infiltrado en los poderes del ejecutivo, el legislativo y el judicial.

Al presidente Rafael Correa, que dejó el poder en 2017 con el Ecuador como el país más seguro de América Latina solo por detrás de Uruguay, también se le achacó no haber podido diversificar la economía y hacerla por lo tanto menos dependiente de las subidas y bajadas de los precios del petróleo. Los gobiernos que vinieron después, como el de Lenin Moreno que, siendo del mismo partido (la Revolución Ciudadana), pasó a la historia por “haber traicionado” a su predecesor, así como el posterior gobierno del banquero Guillermo Lasso, practicaron unas políticas neoliberales justificadas por el endeudamiento del Estado bajo el periodo de Correa: Antes de su gobierno, en 2006, la deuda del PIB Ecuatoriano era del 33,09% (Expansión, 2006), mientras que en 2017, cuando Correa ya no estaba en el poder, la deuda llegó hasta el 52,5% (Ecuador Chequea, 2026).

En este contexto, los acuerdos que llevaron a cabo tanto el gobierno de Lenin Moreno como el de Guillermo Lasso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) deben encuadrarse, aunque no formase parte explícita, en la vuelta a unos años noventa donde los Estados Unidos volverían a ejercer una especie de tutelaje. Los dos levantamientos indígenas que vivió el país en 2019 y 2022 sirvieron, por un lado, para ser el embrión de una serie de protestas a nivel regional que más tarde se acabaron expandiendo tanto Chile como a Colombia.

Sin embargo, a diferencia de los países vecinos, cuyas protestas en parte impulsaron candidaturas progresistas que acabaron llegando al poder en 2022, como la de Gabriel Boric en Chile o la de Gustavo Petro en Colombia, en Ecuador el giro es exactamente el contrario cuando Daniel Noboa, hijo de Álvaro Noboa, el empresario bananero más importante del país, toma el poder en 2023. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, tan solo tres meses antes de la segunda vuelta que tuvo lugar entre la candidata *correísta* Luisa González y Daniel Noboa, enrareció una campaña en la que dicho candidato se había definido en varias ocasiones como un “perseguido” del *correísmo*. Es en este clima donde comienza lo que en este artículo se ha denominado el “laboratorio ecuatoriano”.

A principios de marzo de 2026, un grupo de expertos vinculados a la ONU presentaba un informe que acusaba al gobierno de Nayib Bukele de crímenes de lesa humanidad. Según este informe, el asesinato, el encarcelamiento de niños, la tortura, la violencia sexual y las desapariciones forzadas no habrían sido “excepciones” en la política de seguridad de este gobierno, sino el método por el cual el mandatario habría alcanzado “cifras récord” en materia de seguridad (El País, 2026). Prácticamente en la misma semana que salía el informe referido a El Salvador, ocho relatores especiales de la ONU afirman que en el Ecuador no existía un “conflicto armado interno” (Primicias, 2026). La Corte Constitucional ecuatoriana, que en 2026 acumula 26 demandas en contra de las medidas especiales llevadas a cabo de por el gobierno de Noboa, también ha sido objeto de críticas por parte del gobierno al no permitirle avanzar en un Estado cada vez más autoritario que toca cada vez más la esfera de los derechos fundamentales de los ecuatorianos.

Está por ver cuáles serán las consecuencias a futuro del proceso de formación del “laboratorio ecuatoriano”, que se ha ido gestando en apenas tres años desde una serie de hechos históricos que bien podrían haber tenido lugar a lo largo de los 200 y pocos años de la república (allanamiento de una embajada, declaración de conflicto armado interno, hacinamientos y masacres en cárceles, ejecuciones extrajudiciales a adolescentes, entre otros). A 10 años de los acuerdos de paz en Colombia entre las

FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, Ecuador representa un paciente en cuidados intensivos cuyos cuidados paliativos parece que han sido peores que la propia enfermedad. Tendremos que esperar para ver cuándo “la Cuba de los Andes” vuelve a despertar.

Referencias

- Acosta, A. y Cajas Guijarro, J. (2020). Rebelión en los Andes. Ecos económico-políticos del levantamiento popular Ecuatoriano. En Segundo Neptali Martínez Santip (Eds.), Octubre (pp. ##-##). Editorial El Arbol de Papel.
- Buckley, N. (2026). Ecuador. Alfaro Vive ¡Carajo!. En J. Ríos, M. García de las Heras. (Eds.) *Guerrillas in Latin America. The Latin American Studies Book Series* (pp. 215-232). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-97521-9_13
- Córdova-Alarcón, L. (2026). El Estado de guerra como mecanismo de dominación política en Ecuador. *Sociología Y Política HOY*, (11), 137-157.
- Cueva, A. (1967). *Entre la ira y la esperanza*. Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- De Castro García, A., y Avellaneda Vera, C. (2019). *Implementación de la paz: el desafío para la relación bilateral en materia de narcotráfico entre Colombia y Ecuador*. Real Instituto El Cano. Recuperado de: <https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2021/10/ari16-2019-decastro-avellaneda-implementacion-paz-narcotrafico-colombia-ecuador.pdf>
- Devia-Acevedo, E. D. y Niño, C. (2025). Dilemas de la militarización en el posconflicto armado colombiano: “del enemigo interno” a “la paz total”. *Íconos - Revista De Ciencias Sociales*, (83), 89-110. <https://doi.org/10.17141/iconos.83.2025.6547>
- Dolores Ordoñez, M. (2017). Pos acuerdo de paz: desafíos para Colombia, consecuencias para Ecuador”. En *Amenazas Globales. Consecuencias locales. Retos para la inteligencia estratégica actual*. Editado por David Andreade Aguirre. Publicaciones científicas Universidad de las Fuerzas Armadas. ESPE.
- Hidalgo Flor, F. (Ed.) (2021). *Proceso constituyente y buen vivir, 2007-2022*. Reed de Carreras de sociología y política del Ecuador.
- Kohn, E. O. (2002). Infidels, virgins, and the black-robed priest: a backwoods history of Ecuador’s Montaña region. *Ethnohistory*, 49(3), 545-582. <https://doi.org/10.1215/00141801-49-3-545>
- Leech, G. (2011). *The FARC; The longest insurgency*. Zed Books. <https://doi.org/10.5040/9781350223127>
- Matta, A. (1999). *Colombia y las FARC-EP. Origen de la lucha guerrillera. Testimonio del comandante Jaime Guaraca*. Txalaparta.
- Mideros Mora, A. I., & Aguirre-Armijos, A. (2022). La política económica de Lenin Moreno y su impacto en el bienestar de las y los ecuatorianos. En J. Paz, C. Miño (Eds.) *Cambio de rumbo Ecuador: Economía y sociedad 2017-2021* (pp. 63-77 ##-##). Navegando Publicaciones. Recuperado de: <https://www.editoranavegando.com/cambio-de-rumbo>
- Moscoso Larenas, A. M. (2014). *Ecuador y Colombia. Caso de estudio “Conflicto Angostura 2008-2011” y la ruptura de la paz democrática ante la amenaza a la seguridad* [Tesis de Maestría. Universidad Andina Simón Bolívar]. Rraae. https://rraae.cedia.edu.ec/vufind/Record/UASB_d130608af57235cae2c0e30787b1af66/Cite?sid=3273493&lng=fi . URL.
- Radcliffe, S. A. (2001). Imagining the State as a Space: Territoriality and thev Formation of the State in Ecuador. En *Imagining the State as a Space: Territoriality and the Formation of the State in Ecuador* Editado por Thomas Blom Hansen;
- Finn Stepputat (pp. 123-149). Duke University Press. <https://doi.org/10.1215/9780822381273-005>
- Segato, R.L. (2006). *La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado*. Tinta Limón.
- Whitten, N. (Ed.). (2003); Introduction. En N. Whitten. (Ed.), *Millenial Ecuador. Critical Essay son Cultural Transformations and Social Dynamics* (pp. 1-46). University of Iowa Press.

Medios de comunicación

- (2016). Colombia: ganó el “No” en el plebiscito por los acuerdos de paz con las FARC (2016). BBC. Recuperado de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37537187>
- BBC News Mundo (Entrevista a Jorge Núñez, 2024). En Ecuador “si siguen metiendo gente a la cárcel van a seguir alimentando las redes del crimen organizado”. Recuperado de: <https://www.bbc.com/mundo/articles/crgllwzpz29o>
- Los 4 de Guayaquil: condenan a penas de prisión a 16 militares en Ecuador por la desaparición forzada de los menores (2025). *BBC News Mundo*. Recuprado de: <https://www.bbc.com/mundo/articles/c246mrd1zrlo>
- EE.UU. asegura que ha retirado visas a “generales” vinculados al narcotráfico y Ecuador pide información (2021). *CNN en Español*. Recuperado de: <https://cnnespanol.cnn.com/2021/12/13/eeuu-narcotrafico-ecuador-orix>



- La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump expresa una ambición irrealizable (2026). CTXT. Recuperado de: https://ctxt.es/es/20260101/Politica/51746/Sebastian-Faber-Alvaro-Guzman-Batista-Greg-Grandin-Donald-Tump-Estrategia-de-Seguridad-Nacional.htm?fbclid=IwY2xjawRA_SBLEHRuA2FlbQIxMOBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjlwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeU_TXZjxQNYwEs0wpXaxbzt0q0Vy2mLShbMCCr-IytXvU_zJnKfUaGeZMyM_aem_9hWuz7dEDlksKkUASxgrMg
- Deuda pasó de 41 mil millones a 75.000 millones entre la era de Correa y la de Lasso (2026). *Ecuador Chequea*. Recuperado de: <https://ecuadorchequea.com/las-cifras-dadas-por-el-post-se-acercan-a-las-oficiales-pero-no-son-exactas/>
- La impunidad cubre a los muertos y heridos de las protestas de 2019 en Ecuador (2022). *El País*. Recuperado de: <https://elpais.com/internacional/2022-06-07/la-impunidad-cubre-a-los-muertos-y-heridos-de-las-protestas-de-2019-en-ecuador.html>
- La crisis humanitaria que la paz total no pudo parar: los ataques y desplazamientos vuelven al Catatumbo (2024). *El País*. Recuperado de: <https://elpais.com/america-colombia/2025-12-28/la-crisis-humanitaria-que-la-paz-total-no-pudo-parar-los-ataques-y-desplazamientos-vuelven-al-catatumbo.html>
- Asesinatos, tortura y desapariciones: un grupo de expertos acusa al Gobierno de Bukele por crímenes de lesa humanidad ante la ONU (2026). *El País*. Recuperado de: <https://elpais.com/america/2026-03-10/asesinatos-tortura-y-desapariciones-un-grupo-de-expertos-acusa-al-gobierno-de-bukele-por-crmenes-de-lesa-humanidad-ante-la-onu.html>
- Deuda Pública de Ecuador (2006). *Expansión*. Recuperado de: <https://datosmacro.expansion.com/deuda/ecuador?anio=2006>
- Viuda del candidato de Ecuador asesinado Fernando Villavicencio exige respeto a AMLO (2024). *El Universal*. Recuperado de: <https://www.eluniversal.com.mx/mundo/viuda-del-candidato-de-ecuador-asesinado-fernando-villavicencio-exige-respeto-a-amlo/>
- Ecuador: ataúdes de cartón y neveras para los muertos por el Covid-19 en Guayaquil (2020). *France 24*. Recuperado de: <https://www.france24.com/es/20200405-ecuador-ataudes-carton-everas-muertos-covid19-guayaquil>
- Daniel Noboa ha decretado 11 estados de excepción en 27 meses (2026). *La Hora*. Recuperado de: <https://www.lahora.com.ec/politica/en-27-meses-hubo-11-estados-de-excepcion-y-dos-renovaciones-20260301-0014.html>
- El año más violento de Ecuador: 9.216 homicidios en 2025 (2026). *Primicias*. Recuperado de: <https://www.primicias.ec/seguridad/ecuador-homicidios-asesinatos-violencia-crimen-organizado-2025-114304/>
- La ONU afirma que en Ecuador no existe un conflicto armado y critica los argumentos del Gobierno sobre terrorismo (2026). *Primicias*. Recuperado de: <https://www.primicias.ec/politica/onu-carta-ecuador-conflicto-armado-derechos-humanos-argumentos-gobierno-daniel-noboa-terrorismo-118473/>
- Why Ecuador risked global condemnation to storm Mexico's embassy Jorge Glas, who had claimed asylum from Mexico, is accused of abetting drug networks (2024). *The Economics*. Recuperado de: <https://www.economist.com/the-americas/2024/04/18/why-ecuador-risked-global-condemnation-to-storm-mexicos-embassy>
- EE. UU. dijo haber ayudado a bombardear un campamento de narcotraficantes en Ecuador. Era una finca lechera (2026). *The New York Times*. Recuperado de: <https://www.nytimes.com/es/2026/03/24/espanol/america-latina/estados-unidos-ecuador-ataque-narco-finca.html>

Podcast

- Delgadillo, J. (13-03-2026). El Hilo. "Volver al futuro. Porque la nueva derecha quiere reinterpretar la historia". Podcast de audio. <https://open.spotify.com/episode/4BWCNa6Ry7U2YQIvdVOzxn>